

Recibí
Ma. del Carmen T.
Sep. 22/2021 10:18am

PROPOSICIÓN ADITIVA

1312

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley 158 de 2021 Cámara y 96 de 2021 Senado "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022" el cual quedará así:

ARTÍCULO NUEVO: Con el objeto de administrar, fabricar, explotar, transformar y comercializar las sales que se producen en las salinas marítimas de Manaure, La Guajira, en beneficio de la comunidad WAYUU, para el reconocimiento de sus derechos ancestrales, se crea un patrimonio autónomo que se denominará SALINAS MARÍTIMAS DE MANAURE, el cual gestionará los activos, pasivos y obligaciones con los que cuente la sociedad SALINAS MARÍTIMAS DE MANAURE LIMITADA— SAMA LTDA a 31 de diciembre de 2021.

El patrimonio autónomo se registrará por normas de derecho privado, tendrá vocación de permanencia y será administrado por la sociedad fiduciaria que determine el Gobierno Nacional.

En cumplimiento de lo anterior, los recursos que integrarán el patrimonio autónomo son los siguientes:

1. Recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos aportados por las sociedades y entidades que integran la rama ejecutiva del poder público en el orden Nacional, entidades territoriales o por particulares a través de convenios o transferencias.
3. Donaciones.
4. Recursos de cooperación nacional o internacional.
5. Rendimientos financieros generados por los recursos entregados, los cuales se reinvertirán de pleno derecho en el vehículo.
6. Los demás recursos que obtenga o se le asignen a cualquier título.

Los gastos de funcionamiento y administración en que incurra por la operación de este patrimonio se reintegrarán a la sociedad fiduciaria que lo administre.

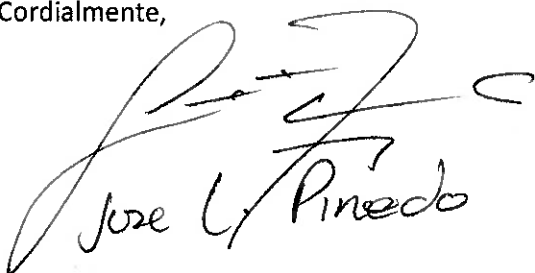
Parágrafo 1: La creación del patrimonio autónomo se presenta sin perjuicio del incumplimiento del acuerdo de reorganización alcanzado con la Superintendencia de Sociedades por parte de la sociedad SALINAS MARÍTIMAS DE MANAURE LIMITADA— SAMA LTDA, con el exclusivo propósito de salvaguardar los derechos ancestrales de la comunidad Wayuu. Esta especial circunstancia se autoriza por única vez.

Parágrafo 2: Se autoriza al Gobierno Nacional para apropiar y transferir al patrimonio autónomo creado a través del presente artículo, recursos del Presupuesto General de la Nación en una cuantía

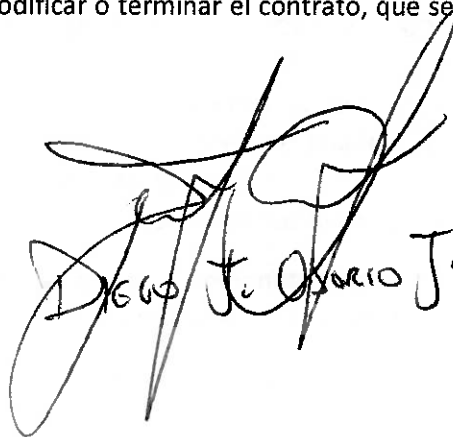
equivalente a VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$22.350.158.501).

Parágrafo 3: El Gobierno Nacional reglamentará las composición de la junta asesora del patrimonio autónomo; los aspectos mínimos del contrato de fiducia mercantil y el procedimiento para su celebración; las funciones de la junta asesora; designación y funciones de la persona que asume la representación legal de la sociedad fiduciaria; el régimen de los actos y contratos que pueden celebrarse con los recursos del fideicomiso; coordinación entre los actos y contratos celebrados con recursos del fideicomiso; condiciones en las que pueden aceptarse nuevos aportes, públicos o privados, al fideicomiso; causas y procedimiento para modificar o terminar el contrato, que será a término indefinido."

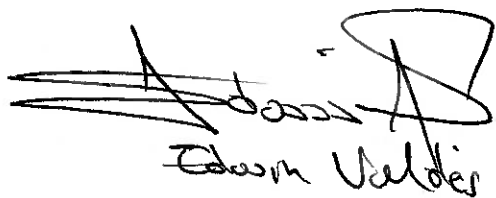
Cordialmente,



Jose L. Pineda



Diego Teodoro J.



Edson Valdez



Rocio Suarez



La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentará a continuación proposición respecto del ejercicio de la sociedad Salinas Marítimas de Manaure Limitada -SAMA-, previos hechos y consideraciones que también se reseñan más adelante:

1.- Acuerdo

El 27 de junio de 1991, el Gobierno Nacional, por conducto del Instituto de Fomento Industrial -IFI- Concesión de Salinas firmó un acuerdo con la comunidad Wayuu de Manaure, en el cual se acordó que se crearía una sociedad de economía mixta sobre la que el Estado colombiano tendría una participación no inferior al cincuenta y uno por ciento (51%) y la comunidad Wayuu una mínima del veinticinco por ciento (25%), para la explotación de las salinas de Manaure. Las utilidades de esa sociedad se destinarían a satisfacer las necesidades fundamentales de la comunidad Wayuu de Manaure.

2.- Sentencia de Tutela

Por diferentes circunstancias, para 1995, la sociedad no se constituyó, lo cual llevó a que con sentencia T-0072 de 1995, la Corte Constitucional decidiera una acción de tutela que amparó los derechos fundamentales de la comunidad Wayuu de Manaure y ordenó que se cumpliera el acuerdo de 1991 tal como había sido firmado o que se adoptaran medidas alternativas que produjeran los mismos efectos sobre la comunidad Wayuu, en el sentido de permitirles gozar de un especial nivel de vida en el medio en el cual habitan.

3.- Ley 773 de 2002

Solamente hasta el 2002, mediante Ley de la República y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en 1991, se autorizó la creación de una sociedad de economía mixta, en calidad de concesionaria, vinculada al Ministerio de Desarrollo -actual Ministerio de Comercio Industria y Turismo- cuyo objeto principal sería la administración, fabricación, explotación, transformación y comercialización de sales que se producían en las salinas marítimas de Manaure, Guajira, actividades que desarrollaba el Instituto de Fomento Industrial -IFI-, con motivo de un contrato de administración delegada celebrado con la Nación el primero (1) de abril de 1970, por el que se creó el ente IFI Concesión de Salinas.

4.- Composición

En el artículo 2 de la ley se dispuso que en los tres (3) meses siguientes a su entrada en vigencia, el IFI, a nombre de la Nación entregaría, en calidad de capital inicial de la nueva sociedad, la totalidad de los activos vinculados al contrato de administración

delegada, en lo relativo a las salinas marítimas de Manaure, Guajira, a la asociación de autoridades tradicionales indígenas Wayuu del área de influencia de las Salinas de Manaure, "Sumain Ichi", en un 25%, al Ministerio de Desarrollo Económico como representante de la Nación en la nueva sociedad el 51%, y el 24% restante al municipio de Manaure, Guajira. Estas transferencias accionarias se harían a las partes referidas como socias de la nueva empresa sin que implicara para ellas costo alguno.

Y agregaba:

"Al momento de constituirse la sociedad de economía mixta, que se autoriza en el artículo 10. de la presente ley, la participación de la asociación "Sumain Ichi", no podrá ser inferior al 25% del capital suscrito y pagado. Una vez constituido este porcentaje podrá variar al igual que el de los otros accionistas de la sociedad. Las utilidades que obtenga el Municipio de Manaure, Guajira, como consecuencia de la participación en esta sociedad serán destinadas a atender los costos que implican el suministro de agua en su territorio a través del sistema no convencional de los molinos de viento."

5.- Escritura Pública No. 135 de 2004

El 21 de diciembre de 2.004, con Escritura Pública 135 de la Notaría Única de Uribia se formalizaron varios actos jurídicos, así:

- a.- Un contrato de sociedad, por el cual se crea Salinas Marítimas de Manaure Ltda – SAMA Ltda-. Se crearon los órganos sociales usuales de las sociedades de responsabilidad limitada y se acordó que, además del control administrativo que por ley corresponde al Gobierno por tratarse de una sociedad de economía mixta, control al que se hizo referencia expresa en el Artículo vigésimo de la Escritura 1353 , se creó un Comité Transitorio Institucional de Vigilancia (artículo décimo quinto de la Escritura 135) por diez (10) años, con funciones de asesoría y seguimiento, para lograr los propósitos perseguidos con la constitución de la sociedad.
- b.- Una cesión de derechos sociales de la Nación, representada por el Ministro de Comercio Industria y Turismo, a las asociaciones Sumain Ichi, Waya wayuu y Asocharma.
- c.- Un contrato de concesión minera, celebrado entre SAMA Ltda y la Nación, representada por el Ministerio de Minas y Energía.

6.- Escritura Pública No. 259 de 2011

Se reformaron los estatutos de la sociedad. Se advierte que el Gobierno Nacional y el IFI Concesión de Salinas habrían hecho caso omiso de las obligaciones adquirido en la No. 135 de 2004, refiere que estos ya no tendrían el control administrativo sobre aquella y establece nuevas funciones al Gerente.

Este documento fue suscrito exclusivamente por el representante legal de la sociedad y establece que su objeto deberá ser reformado para la expedita contratación del operador privado, eliminar condiciones suspensivas y resolutorias establecidas en favor del Gobierno Nacional y adecuarse a la naturaleza de aquella, que sería eminentemente privada.

7.- Pronunciamiento del Consejo de Estado

Por consulta formulada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo de Estado mediante concepto del veintinueve (29) de noviembre de 2012 especificó:

- (i) La Nación cedió sus derechos a título precario, y no se desprendió del control administrativo de la sociedad, que ejerce a través del Comité Transitorio Interinstitucional de Vigilancia. Además, las disposiciones estatutarias son claras en preservar la naturaleza de economía mixta del orden nacional de la sociedad, pese a que la Nación cedió sus derechos sociales. Por estas cláusulas especiales, la sociedad conservaría la naturaleza de economía mixta del orden nacional y su vinculación al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- (ii) La participación del Ministerio es de tal importancia en el funcionamiento de la sociedad, que se estableció que los cesionarios de los derechos de la Nación se obligan a no votar ninguna reforma estatutaria que recorte o disminuya los derechos que se reserva por conducto del Ministerio en la administración, como parte integrante del Comité¹ y que cualquier disminución deberá obedecer a la voluntad del Gobierno Nacional.

8.- Funcionamiento de la sociedad

La imposibilidad de contratar un operador privado idóneo que hiciera frente a las obligaciones de concesión, las dificultades administrativas y operativas de la sociedad, el incumplimiento de las obligaciones financieras a su cargo, el incorrecto manejo de los activos e incluso las vías de hecho originadas por la misma comunidad

¹ Artículo 15 de los Estatutos de la sociedad.

wayúu impusieron que se iniciara proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006.

9.- Disposición de la Superintendencia de Sociedades

A juicio de la Superintendente Delegada para Procesos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, doctora Susana Hidvegui Arango estableció que debía culminarse el procedimiento de reorganización, pues la sociedad ha incumplido los acuerdos alcanzados y su ejercicio no le permitiría continuar con el desarrollo de su objeto lo que impondría liquidarla.

10.- Obligaciones de la sociedad

Según reporte del administrador de la sociedad tiene obligaciones pendientes por valor de veintidós mil trescientos cincuenta millones ciento cincuenta y ocho mil quinientos un pesos (\$22.350.158.501).

Proposición

A partir de los antecedentes reseñados, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se permite presentar proposición tendiente a salvaguardar los intereses y ejercicio de la sociedad.

Lo anterior, sin soslayar que se trata de una sociedad de economía mixta -en función de la participación de una entidad territorial- y por tanto descentralizada, con sujeción al artículo 38 de la Ley 489 de 1998, condición que por expreso mandato legal -artículo 3 de la Ley 1116 de 2011- proscribe a la Superintendencia de Sociedades a adelantar la etapa de liquidación.

1.- Proyecto de Ley

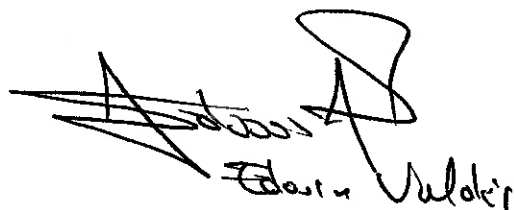
Con sujeción a las funciones constitucionalmente otorgadas al Congreso de la República, previa concertación con la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se presentaría para discusión proyecto de artículo que crearía patrimonio autónomo que para que gestione los activos, pasivos y obligaciones con los que cuente la sociedad a treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

Desde su creación, la sociedad ha tenido problemas operativos, administrativos y claramente financieros. La ejecución del contrato de concesión para la explotación del recurso natural ha sido deficiente, no se contrató al operador adecuado y esto -en datos de los administradores de la empresa- deriva en obligaciones pendientes de cancelar por más de veintidós mil millones de pesos (\$22.000.000.000).

Por la naturaleza de la sociedad, el deber que le impuso el ordenamiento jurídico al Gobierno Nacional y las manifestaciones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto del control que aquel debe ejercer y el imperativo de preservar derechos ancestrales de la comunidad wayúu, se plantea que por conducto del patrimonio autónomo, en el que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sería el fideicomitente, se administren los recursos aportados, se destinen adecuadamente y se definan los lineamientos para la empresa sea sostenible.

Esta proposición pretende enmendar defectos en la creación de la sociedad. Los recursos no serían entregados a sus administradores o representantes sino dirigidos por el Gobierno Nacional para cubrir las obligaciones pendientes y ejecutar oportuna y eficientemente el contrato de concesión que tiene por objeto la explotación del recurso natural.

El contrato de fiducia mercantil que se proyecta celebrar establecería las prestaciones, obligaciones y los compromisos a cargo del Gobierno Nacional y de los representantes de la sociedad. Esto, sobre la base de cumplir con el deber constitucional de proteger la diversidad étnica y cultural de la comunidad Wayúu.



Edwin Valderrama



Diego Jaramillo

